

Programas piloto y casos empíricos como paso previo hacia el Ingreso Básico Universal

Pilot programs and empirical cases as a stepping stone toward Universal Basic Income

José Fabian Osorio Aranzabal^a, Daniel Velázquez Orihuuela^b,

Abstract:

This article presents a review of five guaranteed income experiences implemented in different contexts: Mincome (Canada), the Alaska Permanent Fund Dividend, the national experiment in Finland, and the municipal programs of Cambridge and Stockton in the United States. Although these experiences do not represent full implementations of a Universal Basic Income (UBI), they share some of its core principles, such as periodic and unconditional transfers of monetary resources. Through the analysis of these cases, the effects of unconditional income on variables such as labor market participation, economic stability, and mental well-being are examined. Although the program designs varied and some were targeted, all of them showed that guaranteed income did not reduce the willingness to work. On the contrary, it allowed many people to reorganize their work and family life with greater freedom. Improvements were also identified in mental health and food security. These cases offer valuable insights into the potential of guaranteed income as a public policy tool and serve as empirical groundwork to enrich the debate on the feasibility and social impacts of moving toward broader, more universal schemes such as UBI.

Keywords:

Lorem, Universal Basic Income, empirical evidence, bargaining power, labor market, social experiments.

Resumen:

Este artículo presenta una revisión de cinco experiencias de ingreso garantizado implementadas en distintos contextos: Mincome (Canadá), el dividendo permanente de Alaska, el experimento nacional en Finlandia, y los programas municipales de Cambridge y Stockton en Estados Unidos. Aunque estas experiencias no representan implementaciones completas del Ingreso Básico Universal (IBU), comparten algunos de sus principios fundamentales, como la entrega periódica e incondicional de recursos monetarios. A través del análisis de estos casos, se examinan los efectos del ingreso incondicional sobre variables como la participación en el mercado laboral, la estabilidad económica y el bienestar mental. Aunque los diseños de los programas fueron diversos y en algunos casos focalizados, en todos se observó que el ingreso garantizado no redujo la disposición a trabajar. Por el contrario, permitió a muchas personas reorganizar su vida laboral y familiar con mayor libertad. También se identificaron mejoras en la salud mental, la seguridad alimentaria. Estos casos ofrecen elementos útiles para reflexionar sobre el potencial del ingreso garantizado como política pública, y sirven como base empírica para enriquecer el debate sobre la viabilidad y los efectos sociales de avanzar hacia esquemas más amplios y universales como el IBU.

Palabras Clave:

Ingreso Básico Universal, evidencia empírica, poder de negociación, mercado laboral, experimentos sociales.

a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Maestría en Estudios Económicos | Pachuca-Hidalgo | México,
<https://orcid.org/0009-0007-9271-0577> E-mail: os188422@uaeh.edu.mx

b Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Área Académica de Economía | Pachuca-Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0002-0953-9905> E-mail: daniel.velazquez7607@uaeh.edu.mx



Introducción

El Ingreso Básico Universal (IBU) ha sido objeto de creciente atención en los debates sobre política social, tanto en casos de emergencia (crisis económicas, pandemias o desastres naturales), como en escenarios de transformación estructural del modelo de bienestar. La definición más aceptada, lo describe como una transferencia monetaria periódica, individual, incondicional y universal, otorgada a todos los ciudadanos sin importar su situación laboral, nivel de ingresos o condición social (*Basic Income Earth Network*, 2019). Aunque su implementación completa aún no ha ocurrido en ningún país, en las últimas décadas han surgido experiencias parciales o experimentales de ingreso garantizado que comparten varios de sus principios fundamentales.

Estos programas, si bien no cumplen completamente con los criterios del IBU, por ser focalizados, temporales o con cobertura limitada, permiten observar cómo responde la población cuando recibe un ingreso regular sin condiciones laborales. Mediante el análisis de casos específicos, es posible evaluar efectos concretos en variables clave como la participación en el mercado de trabajo, la salud mental o la seguridad financiera. Por esa razón, analizar este tipo de políticas resulta útil para informar el debate sobre los efectos y las limitaciones del IBU en contextos reales.

Este artículo analiza cinco experiencias concretas de ingreso garantizado que, aunque no constituyen ejemplos plenos de IBU, permiten observar cómo operan algunas de sus características fundamentales en contextos reales y diferenciados. Los casos seleccionados incluyen el dividendo permanente de Alaska, el experimento *Mincome* en Canadá, el piloto nacional en Finlandia, y dos programas municipales en Estados Unidos: RISE en Cambridge y SEED en Stockton, California.

La elección de estos casos se basa en dos razones principales: primero, porque son muy importantes en el debate internacional sobre un ingreso garantizado; y segundo, porque cuentan con estudios serios que permiten comparar lo que pasó en cada experiencia. Aunque existen experiencias en países del sur global, como el *Basic Income Grant* en Namibia (Haarmann, Haarmann, Jauch, Shindondola-Mote, & Natrass, 2009), los pilotos de transferencias incondicionales en Kenia (Haushofer & Shapiro, 2016) o el programa “Bolsa Familia” en Brasil (Lindert, Linder, Hobbs, & de la Brière, 2007), los cinco casos elegidos son los más citados y discutidos hoy en día.

El dividendo de Alaska es famoso porque es el único caso que lleva décadas aplicándose de forma universal y permanente. El experimento *Mincome* en Canadá es

clave, porque fue uno de los primeros en mostrar cómo el ingreso garantizado puede influir en el trabajo, la educación y la salud. El piloto en Finlandia es muy usado en el debate actual porque fue un experimento nacional reciente que buscó medir los efectos sobre el empleo y el bienestar. De la misma manera, SEED en Stockton y Cambridge RISE son dos de los ejemplos más actuales y llamativos, porque se aplicaron a nivel local en Estados Unidos y han generado mucha atención en medios académicos.

Dichos programas difieren en alcance, duración, población objetivo y objetivos institucionales. Mientras que el caso de Alaska es universal y permanente, otros, como los de Cambridge, Stockton y Finlandia, aplicaron criterios de elegibilidad basados en ingresos bajos o situación de desempleo. A pesar de estas diferencias, todos los programas elegidos comparten un rasgo central: entregar un ingreso regular de manera incondicional respecto al uso del dinero, sin requerir que los beneficiarios demuestren disponibilidad inmediata para trabajar ni imponer exigencias posteriores de rendimiento o comportamiento.

La elección de estos casos responde a su relevancia y a la disponibilidad de estudios de evaluación rigurosos. El análisis adoptado es descriptivo y comparativo. Se examinan los efectos que estos ingresos han tenido sobre variables clave, como el nivel de empleo, la estabilidad financiera, la salud mental y la percepción social del programa. En conjunto, estos ejemplos permiten reflexionar sobre el potencial del ingreso garantizado como política de apoyo económico, y aportan evidencia útil para discutir las condiciones necesarias para avanzar hacia esquemas más amplios y universales como el IBU.

Alaska Permanent Fund Dividend (APFD)

El caso del *Alaska Permanent Fund Dividend* (APFD) constituye una referencia obligada en el estudio del IBU, debido a su relevancia como una política de transferencia monetaria incondicional de alcance amplio y aplicación sostenida en el tiempo. Aunque no cumple con todos los criterios exigidos para ser considerado un IBU, en sentido estricto, su diseño y efectos lo posicionan como una experiencia empírica de enorme valor para analizar los posibles impactos sociales y económicos de políticas universales de ingreso.

El APFD fue creado en 1976, mediante una enmienda constitucional con el objetivo de transformar parte de los ingresos derivados de la renta petrolera estatal en un fondo soberano permanente, protegiendo dichos recursos para las generaciones futuras (Goldsmith, 2002). A partir de 1982, el Estado comenzó a distribuir anualmente dividendos a todos los residentes legales de Alaska, financiados con las ganancias del fondo. Estos pagos

constituyen el APFD que ha entregado una cantidad variable de dólares por persona al año. En 2015, el ingreso permanente fue de 2,072 dólares, la cifra más alta desde su creación en 1982, siendo tan solo comparable en 2008 con la cifra de 2,069 dólares, mientras que las cifras más frecuentes están entre los 1,500 y 1,900 dólares anuales (Permanent Fund Dividend, 2024).

Aunque el APFD comparte varias características con el IBU, como su carácter universal dentro del estado, su pago individual, regular e independiente del empleo o ingreso, presenta algunas diferencias clave. En primer lugar, el monto no es suficiente para garantizar una vida digna por sí mismo, por lo que no cumple con el principio de suficiencia del IBU. En segundo lugar, aunque el acceso es amplio, se requieren requisitos mínimos de residencia, lo cual limita su condición de incondicionalidad total (Marinescu, 2017). No obstante, su permanencia durante más de cuatro décadas, su bajo costo administrativo y su aceptación pública lo convierten en un antecedente sólido para evaluar la factibilidad y los efectos de políticas similares.

El diseño del APFD refleja un principio de reparto colectivo de la riqueza natural, convirtiéndose en un ejemplo práctico del pensamiento de Thomas Paine (1797), respecto a de que los recursos naturales deben beneficiar a toda la ciudadanía por igual (Howard & Widerquist, 2012). Se financia con una porción de los intereses obtenidos por el fondo soberano, y el pago es idéntico para todos los ciudadanos elegibles, independientemente de su condición laboral, edad o nivel socioeconómico. El diseño del programa ha sido muy valorado porque es transparente y ha logrado crear un fuerte apoyo entre la población. Como todos los residentes, reciben dinero directamente, mucha gente lo defiende, lo que hace difícil que el gobierno pueda eliminarlo (Goldsmith, 2002).

Diversos estudios han evaluado los efectos del APFD en variables económicas clave. En lo que respecta a la participación laboral, Jones y Marinescu (2018) analizaron el impacto del APFD sobre el empleo, utilizando un grupo de comparación construido artificialmente a partir de otros estados de EE.UU. con características similares. Esto les permitió comparar lo que ocurrió en Alaska con lo que probablemente habría pasado si no se hubiera entregado ese ingreso. Los resultados mostraron que no hubo una disminución significativa en el empleo total, y que, por el contrario, hubo un leve aumento en el empleo a tiempo parcial, especialmente entre ciertos grupos como mujeres jóvenes con hijos. Esto sugiere que entregar ingresos de forma universal no desincentiva trabajar, y que incluso puede permitir a algunas personas reorganizar mejor su tiempo y condiciones laborales.

Por su parte, Bibler, Guettabi y Reimer (2019) reportaron que un aumento de 1,000 dólares en el dividendo

incrementa levemente la demanda de trabajo masculino, mientras que entre las mujeres se observa una reducción marginal en las horas trabajadas, concentrada en aquellas con hijos pequeños.

En términos de consumo, estudios como los de Hsieh (2003) y Kueng (2018) han demostrado que los hogares tienden a aumentar su gasto en bienes no duraderos y servicios durante el trimestre posterior al pago del dividendo. Esto sugiere que el APFD tiene un efecto positivo sobre la demanda agregada local.

Uno de los análisis sobre el impacto del APFD en la pobreza fue realizado por Matthew Berman (2023), quien reconstruyó las tasas de pobreza oficiales con y sin el ingreso proveniente del dividendo. Para ello, utilizó microdatos públicos de los *Public Use Microdata Samples* del Censo de EE.UU. y de la *American Community Survey*, a fin de estimar cómo varía la condición de pobreza de los hogares en función de si se incluye o no el APFD en su ingreso total.

El procedimiento consistió en calcular el ingreso familiar según la metodología oficial del Censo, primero considerando el monto estimado del APFD recibido por cada hogar, y luego excluyéndolo. Con ambos escenarios (ingreso con APFD e ingreso sin APFD) comparó el resultado contra los umbrales federales de pobreza, que varían según el tamaño y la composición del hogar. A partir de esta comparación, Berman identificó qué hogares estarían por debajo de la línea de pobreza en cada uno de los dos casos.

Los resultados son contundentes: la inclusión del APFD en los ingresos familiares reduce significativamente las tasas de pobreza en Alaska.

Tabla 1. Tasa de Pobreza de Alaska

Año	Tasa de pobreza oficial (%)	Tasa de pobreza ajustada sin APFD (%)	Tasa de pobreza ajustada con APFD (%)
1990	7.6%	8.7%	6.3%
2000	8.9%	10.6%	6.4%
2005-09	9.4%	10.8%	8.4%
2010-14	10.5%	11.4%	9.3%
2015-19	10.4%	11.6%	9.1%
2020	8.8%	9.5%	8.3%

Fuente: Elaboración propia con base en Berman, 2023

No obstante, la literatura también señala limitaciones. Guettabi (2019) advierte que, si bien el APFD ha reducido la pobreza en zonas rurales, también ha generado un leve aumento en la desigualdad del ingreso en el largo plazo, debido a su carácter uniforme que no discrimina entre grupos de mayor o menor ingreso. Kozminski y Baek (2017) argumentan que una posible explicación para este resultado es que existen diferencias en los patrones de consumo entre los grupos de bajos y altos ingresos al

recibir el pago del APFD. Si los hogares de menores ingresos gastan el dividendo principalmente en bienes no duraderos, mientras que los hogares de mayores ingresos lo ahorran o invierten, esto podría generar una ampliación gradual de las disparidades económicas entre ambos grupos.

Además, algunas investigaciones sugieren que el dividendo ha podido incentivar dinámicas migratorias internas hacia Alaska, particularmente de hogares de bajos ingresos que buscan acceder al beneficio (Feinberg & Kuehn, 2018).

En síntesis, el *Alaska Permanent Fund Dividend* representa un experimento social de gran escala que ha permitido observar los efectos de una transferencia incondicional y universal en un contexto real. Aunque no es un IBU completo, el dividendo de Alaska, por llevar años funcionando, por tener apoyo de la gente y por los efectos que se han podido medir, sirve como un buen ejemplo práctico para entender si un IBU podría funcionar, ser aceptado y qué efectos podría tener en otros lugares o países.

Mincome (Canadá)

El experimento Mincome (*Manitoba Basic Annual Income Experiment*), implementado en Canadá entre 1975 y 1977, es uno de los antecedentes empíricos más importantes en el estudio del Ingreso Básico Universal (IBU). Se trató de un programa piloto financiado por el gobierno federal canadiense en colaboración con la provincia de Manitoba, cuyo propósito era evaluar las consecuencias económicas y sociales de otorgar un ingreso anual garantizado a los hogares. Aunque su duración fue limitada y su análisis interrumpido por razones políticas, los datos generados permitieron posteriores estudios que siguen siendo relevantes en la actualidad.

El experimento se dividió en tres zonas de aplicación: Winnipeg, una muestra rural y, principalmente, la ciudad de Dauphin, en la cual todos los residentes fueron considerados potenciales beneficiarios. Esto convirtió a Dauphin en un caso de “saturación”, lo que significa que el programa no solo afectaba a individuos o grupos seleccionados, sino que involucraba a toda una comunidad, permitiendo observar efectos tanto individuales como colectivos. A diferencia de otros ensayos, como los realizados en EE. UU. durante los años 60 y 70, Mincome tuvo una particularidad que lo hace único: la intención de observar no solo las decisiones laborales, sino también los impactos en salud, educación, relaciones familiares y vida comunitaria.

Los hogares participantes recibían un ingreso garantizado calculado en función del tamaño del hogar y sus ingresos laborales. Por cada dólar que una familia ganaba, se reducía el monto del beneficio en 50 centavos, lo que

configuraba un modelo de ingreso complementario. Esta estructura no eliminaba el incentivo a trabajar, pero ofrecía una red de seguridad efectiva que protegía contra la pobreza sin condicionar la asistencia a una situación de desempleo total. El ingreso se entregaba de manera regular, sin exigencias laborales y con un enfoque administrativo relativamente simple, lo que reducía el contacto con funcionarios y la percepción de vigilancia o juicio moral.

Uno de los aspectos que más interés generó en torno al experimento Mincome fue saber si las personas dejarían de trabajar al recibir un ingreso garantizado. Contra lo que muchos pensaban, eso no ocurrió. Según el estudio de Forget (2011), la mayoría de las personas siguió trabajando como antes, y las reducciones en la oferta laboral fueron pequeñas y en grupos muy específicos.

Por ejemplo, algunas madres jóvenes aprovecharon el ingreso para pasar más tiempo con sus hijos pequeños en casa, sin tener que dejar a los niños al cuidado de otros. También hubo jóvenes que usaron el apoyo económico para seguir estudiando en lugar de entrar de inmediato al mercado laboral. En el resto de la población, especialmente entre adultos en edad laboral, la tasa de empleo se mantuvo estable. Esto mostró que, cuando las personas tienen cubiertas sus necesidades básicas, no necesariamente dejan de trabajar, sino que pueden tomar mejores decisiones sobre cómo y cuándo trabajar (Calnitsky, 2016).

En el área de la salud, los resultados también fueron importantes. Durante los años que duró Mincome, las hospitalizaciones disminuyeron en casi un 9% en la ciudad de Dauphin. Esta reducción se notó sobre todo en casos de problemas de salud mental y accidentes domésticos. Esto sugiere que contar con un ingreso seguro redujo el estrés, la ansiedad y las situaciones peligrosas en el hogar. Tener menos preocupaciones económicas permitió a muchas personas vivir con más calma, cuidarse mejor y evitar enfermedades relacionadas con la pobreza o el agotamiento.

La educación también mejoró durante el experimento. Muchos jóvenes, especialmente varones, decidieron permanecer más tiempo en la escuela. Esto no solo tuvo efectos positivos inmediatos, como mejores notas y menor deserción, sino que también podría haber generado beneficios a largo plazo en sus trayectorias laborales. Contar con un ingreso garantizado no desmotivó el esfuerzo, sino que permitió a los jóvenes apostar por su formación, algo que no siempre es posible cuando el ingreso familiar depende de que todos trabajen lo antes posible.

Estos resultados muestran que Mincome no solo ayudó a aliviar la pobreza, sino que también mejoró el bienestar

general de las personas, sin provocar efectos negativos en el trabajo ni en el compromiso con la comunidad.

Una de las diferencias más importantes entre Mincome y otros programas de asistencia social fue la manera en que las personas se sentían al recibir el ingreso. En los programas tradicionales, muchas veces los beneficiarios deben demostrar que están en situación de pobreza, cumplir requisitos complicados o ser evaluados por funcionarios. Esto puede generar vergüenza, incomodidad o miedo al juicio social. Sin embargo, en el caso de Mincome, estas barreras desaparecieron.

Según el sociólogo David Calnitsky (2016), los habitantes de Dauphin no sintieron vergüenza al participar en el programa. De hecho, muchos veían el ingreso como parte de un proyecto serio y legítimo, algo que no estaba dirigido solo a los pobres, sino a toda la comunidad. El diseño del programa, con reglas claras, pagos automáticos y sin funcionarios que evaluaran el comportamiento, hizo que las personas no se sintieran “ayudadas” ni “dependientes”, sino tratadas con dignidad y como iguales.

Esta forma de ver el programa fue clave para que la comunidad lo aceptara ampliamente, incluso entre personas que en otras circunstancias rechazarían recibir asistencia del gobierno por motivos de orgullo, desconfianza o temor al estigma.

Además, al tratarse de un programa de “saturación”, es decir, donde todos podían participar, no se generaban divisiones entre “merecedores” y “no merecedores”, como suele pasar en los programas focalizados. Esto fortaleció la cohesión social y evitó la sensación de que unas personas eran vigiladas o señaladas por recibir apoyo estatal mientras otras no.

En resumen, Mincome no solo entregó dinero: cambió la forma en que las personas entendían el papel del Estado y su relación con él. Ayudó a construir una cultura donde recibir un ingreso básico no era motivo de vergüenza, sino parte de una política pública respetuosa y justa.

A pesar de sus buenos resultados y del interés académico que generó, el experimento Mincome fue cancelado antes de concluir su fase de análisis formal. El cambio de gobierno en Canadá a finales de los años 70 trajo consigo un enfoque más conservador en política fiscal, y los archivos con los datos completos del experimento fueron almacenados sin procesar durante más de tres décadas. No fue sino hasta el trabajo de la economista Evelyn Forget (2011) que los efectos del programa comenzaron a ser sistemáticamente estudiados y difundidos, permitiendo revalorarlo como una de las experiencias más ricas del siglo XX en materia de política redistributiva.

El legado de Mincome va más allá de los números. No solo demostró que es posible entregar un ingreso garantizado sin destruir los incentivos laborales, sino que también evidenció que estas políticas pueden generar efectos

positivos en salud, educación, cohesión social y bienestar emocional.

Hoy en día, Mincome se ha convertido en una referencia clave para quienes defienden el Ingreso Básico Universal. Sus lecciones siguen vigentes: la importancia de evitar el estigma, el valor de ofrecer seguridad económica sin condiciones, y el potencial de este tipo de programas para empoderar a las personas sin quitarles autonomía ni motivación.

Este caso nos recuerda que la forma en que se entrega el apoyo económico es tan importante como el monto mismo. Diseñar programas universales, simples, justos y dignos no solo mejora resultados económicos, sino que también transforma la manera en que las personas se perciben a sí mismas y se relacionan con su comunidad.

Finlandia

Uno de los casos más relevantes y ampliamente estudiados sobre el IBU es el experimento realizado en Finlandia entre 2017 y 2018. Aunque se trató de un piloto con un alcance limitado y sin todos los elementos característicos de un IBU, su diseño experimental riguroso, su implementación a nivel nacional y la calidad de sus evaluaciones lo han convertido en una referencia central en el debate actual.

El experimento fue implementado por el Instituto de Seguridad Social de Finlandia (Kela), con la coordinación de investigadores del Centro Nacional de Investigación Económica (VATT), la Universidad de Turku, la Universidad de Helsinki y otros centros de investigación. La medida principal fue una transferencia incondicional mensual de 560 euros, entregada durante dos años a un grupo de 2000 personas seleccionadas aleatoriamente entre los desempleados registrados en noviembre de 2016, con edades entre 25 y 58 años. A diferencia del sistema tradicional, los beneficiarios no estaban obligados a buscar activamente empleo ni a aceptar ofertas de trabajo, y los ingresos adicionales no reducían la cuantía del beneficio recibido (Kangas, Jauhainen, Simanainen, & Ylikännö, 2021).

Uno de los elementos que más distingue a este experimento fue su carácter obligatorio para los participantes seleccionados, lo que redujo los sesgos de autoselección típicos de otros estudios similares. Además, al tratarse de un experimento a nivel nacional y con un grupo de control estadísticamente equivalente, se pudieron evaluar con más precisión los efectos causales atribuibles al programa (Hämäläinen, Perkiö, & Ylikännö, 2019).

Desde el punto de vista del diseño, el objetivo del experimento era probar si una renta básica incondicional podía simplificar el sistema de seguridad social, reducir la burocracia y mejorar los incentivos laborales. Según los resultados oficiales, durante el primer año del experimento

los beneficiarios trabajaron, en promedio, seis días más que el grupo de control. Aunque el incremento es modesto, refuta la suposición común de que una renta básica necesariamente reduce la participación en el mercado laboral (Hämäläinen et al., 2019).

En términos de bienestar subjetivo, los beneficiarios reportaron menores niveles de estrés, mayor sensación de seguridad financiera, y una mejor percepción de su salud mental y autonomía personal. También se observaron mejoras en la confianza hacia las instituciones y una menor percepción de obstáculos burocráticos para acceder a otros beneficios (STM, 2020; Tuulio-Henriksson & Simanainen, 2020).

A pesar del interés internacional que despertó, el experimento finlandés también recibió críticas importantes desde varios sectores, tanto académicos como sociales. Uno de los señalamientos más frecuentes fue que el diseño del piloto no reflejaba un Ingreso Básico Universal en sentido estricto, ya que no se aplicó a toda la población ni fue suficiente para cubrir las necesidades básicas. Además, solo participaron personas desempleadas, lo que impidió observar el comportamiento de trabajadores activos o personas fuera del mercado laboral por otras razones.

Otro aspecto que generó debate fue la decisión de no ampliar ni continuar el experimento después de 2018, a pesar de los resultados positivos en términos de bienestar. Según documentos oficiales del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud (STM, 2020), el gobierno optó por implementar reformas en el sistema de beneficios condicionales en lugar de avanzar hacia un modelo universal. Esta decisión fue interpretada por algunos como una señal de falta de voluntad política, mientras que otros la vieron como una corrección técnica frente a las limitaciones observadas.

En el plano mediático, hubo interpretaciones erróneas y contradictorias. Algunos medios internacionales calificaron el experimento como un “fracaso”, afirmando que no aumentó de forma significativa el empleo. No obstante, los informes técnicos y evaluaciones académicas dejaron claro que el objetivo principal no era aumentar masivamente la empleabilidad, sino observar cómo una transferencia incondicional afectaba múltiples dimensiones del bienestar y la relación con las instituciones del Estado (Tuulio-Henriksson & Simanainen, 2020).

Asimismo, varios académicos han señalado que los efectos positivos observados en salud mental, confianza y autonomía deberían valorarse con igual importancia que los indicadores estrictamente laborales. Desde esta perspectiva, el experimento finlandés mostró que un ingreso incondicional puede generar mejoras reales en la calidad de vida, incluso si los efectos económicos son

limitados en el corto plazo. Estas lecciones son especialmente relevantes en los casos donde la burocracia asociada a los programas sociales tradicionales genera ansiedad, exclusión o desincentivos laborales.

El experimento de Finlandia, aunque limitado en alcance y duración, ha aportado significativamente en la discusión global sobre el IBU. Su diseño riguroso, el enfoque experimental controlado y la transparencia en la publicación de resultados lo convierten en uno de los estudios más sólidos y citados sobre políticas de renta básica en las últimas décadas.

Además, el caso finlandés mostró que la simplificación administrativa y la reducción del control burocrático pueden tener un efecto liberador sobre los beneficiarios, al eliminar la constante vigilancia, las reglas opacas y los temores a perder otros beneficios por pequeños ingresos adicionales.

En conclusión, el experimento finlandés no debe ser entendido como un ensayo fallido, sino como una demostración empírica útil y bien documentada que aporta elementos clave para el diseño de políticas públicas más inclusivas, humanas y eficientes.

Cambridge

La ciudad de Cambridge, Massachusetts, implementó entre 2021 y 2023 un programa piloto de ingreso garantizado bajo el nombre de Cambridge RISE (*Recurring Income for Success and Empowerment*), convirtiéndose en una de las primeras ciudades del noreste de Estados Unidos en aplicar esta política a nivel local. A diferencia de otros casos, como el de Finlandia o Alaska, el caso de Cambridge se enfocó en una población concreta en situación de vulnerabilidad: familias de bajos ingresos con al menos un hijo menor de edad bajo su cuidado.

El programa consistió en la entrega de 500 dólares mensuales durante 18 meses consecutivos, de forma incondicional y sin requisitos laborales, a un total de 130 familias seleccionadas aleatoriamente de una base de datos municipal. Los criterios de selección se enfocaron en hogares con ingresos por debajo del 80% del ingreso medio del área (AMI), priorizando a madres solteras, personas de color, migrantes y hogares encabezados por mujeres. Esta focalización respondió al interés de la ciudad de utilizar el piloto como herramienta para reducir desigualdades estructurales.

El programa fue diseñado con la intención de proporcionar estabilidad parcial, reducir el estrés financiero y empoderar a las familias beneficiarias. Una característica clave del piloto fue que no afectaba la elegibilidad para otros programas sociales, lo que permitió evaluar sus efectos sin generar efectos sustitución con otras ayudas existentes.

El programa fue impulsado por la Oficina del alcalde de Cambridge en colaboración con el *Center for Guaranteed Income Research* (CGIR) de la Universidad de Pensilvania, y fue financiado mediante una combinación de fondos públicos, donaciones y colaboración con organizaciones comunitarias locales.

Desde su diseño, Cambridge RISE adoptó un enfoque cualitativo y centrado en la experiencia vivida por los beneficiarios, incorporando entrevistas en profundidad, diarios personales y encuestas de seguimiento para capturar no solo efectos económicos, sino también psicológicos, familiares y comunitarios.

Uno de los hallazgos más consistentes del piloto Cambridge RISE fue la reducción significativa del estrés financiero. Las familias participantes reportaron sentirse más tranquilas y con mayor capacidad para enfrentar emergencias económicas, planificar el mes y cubrir gastos básicos como renta, servicios y alimentos. El informe señala que el ingreso adicional ayudó a evitar atrasos en pagos de vivienda y facturas esenciales, reduciendo así la exposición al desalojo o la acumulación de deudas crónicas (DeYoung et al., 2024).

Desde el punto de vista del empleo, el ingreso garantizado no redujo la participación laboral. De hecho, varios beneficiarios manifestaron que el dinero recibido les permitió mantener la estabilidad laboral, al cubrir transporte, guardería o necesidades básicas que de otra forma habrían impedido seguir trabajando. Algunas personas incluso aprovecharon la estabilidad financiera para buscar mejores oportunidades de empleo, considerar cambios de ocupación o retomar estudios técnicos. Esto desmiente la idea de que las transferencias incondicionales generan dependencia o desalientan el esfuerzo individual.

En términos de consumo y seguridad alimentaria, el ingreso mensual fue clave para garantizar una dieta estable, nutritiva y suficiente. Antes del programa, muchas familias dependían de bancos de alimentos o reducían el número de comidas diarias. Durante el piloto, se observó una disminución de la inseguridad alimentaria, especialmente entre hogares monoparentales encabezados por mujeres, y entre participantes afroamericanos e inmigrantes.

La dimensión emocional y psicológica fue uno de los aspectos más impactantes del piloto. Muchas participantes, en su mayoría mujeres, hablaron de una sensación de alivio al dejar de "vivir al día". Según el CGIR, el ingreso regular permitió reducir la ansiedad, los episodios de depresión y el sentimiento de desesperanza, factores comunes entre quienes viven bajo presión económica constante. Para algunas familias, incluso, el ingreso fue decisivo para salir de relaciones abusivas,

reducir el aislamiento social o mejorar la comunicación en el hogar.

El estudio también muestra que la transferencia, aunque modesta, transformó la forma en que las familias pensaban su futuro. Varios participantes comenzaron a establecer metas de mediano plazo, como ahorrar, cambiar de vivienda, acceder a atención médica o inscribir a sus hijos en actividades extracurriculares. La estabilidad financiera, aunque parcial, permitió una reconstrucción de la agencia personal, es decir, la capacidad de tomar decisiones con mayor libertad y sin miedo al colapso económico inmediato.

Aunque su escala fue limitada, el piloto Cambridge RISE aportó lecciones valiosas sobre cómo implementar políticas de ingreso garantizado a nivel municipal, con un enfoque centrado en la equidad racial, la justicia de género y el bienestar familiar. Una de sus mayores contribuciones fue demostrar que incluso una cantidad modesta de dinero, entregada de forma incondicional, puede generar impactos significativos en la vida cotidiana de familias en situación de vulnerabilidad.

El diseño del programa también demostró que las ciudades pueden movilizar recursos públicos y donaciones privadas locales, para responder a la pobreza urbana de manera ágil, sin necesidad de esperar reformas estructurales a nivel federal.

Este tipo de evidencia ha sido clave para reorientar el debate sobre políticas sociales, alejándose de la lógica del "mérito" o la vigilancia, y acercándose a una visión basada en derechos y autonomía.

Además, el equipo municipal desarrolló sistemas de selección, entrega y seguimiento que podrían ser reutilizados en futuros programas de ingreso garantizado, ayuda en crisis o intervenciones dirigidas a grupos prioritarios. También fortaleció alianzas entre el gobierno local, organizaciones comunitarias y centros de investigación, sentando las bases para una gobernanza más participativa en el diseño de políticas públicas (DeYoung et al., 2024).

En conclusión, Cambridge RISE demostró como esta política pudo brindar estabilidad económica a familias históricamente marginadas. Su experiencia contribuye a pensar el ingreso garantizado no como una medida excepcional o de emergencia, sino como parte de una infraestructura permanente de bienestar urbano.

Stockton

El experimento SEED (*Stockton Economic Empowerment Demonstration*), impulsado por el entonces alcalde Michael Tubbs, fue una de las primeras iniciativas contemporáneas de Ingreso Básico Garantizado lideradas desde el ámbito municipal en Estados Unidos. A partir de febrero de 2019, 125 residentes de bajos ingresos en

Stockton, California, comenzaron a recibir 500 dólares mensuales durante un periodo de dos años, sin ningún tipo de condición, prueba de recursos ni requerimiento laboral. El objetivo principal era evaluar el impacto de este ingreso regular y garantizado en dimensiones clave como la salud física y mental, la estabilidad financiera y la capacidad de agencia de los beneficiarios.

El diseño metodológico del programa se basó en un ensayo controlado aleatorizado (RCT, por sus siglas en inglés), estructurado con una robusta estrategia de investigación mixta que combinó técnicas cuantitativas (paneles de datos, encuestas longitudinales, escalas validadas) con análisis cualitativo profundo. Se conformaron dos grupos: uno de tratamiento, compuesto por 131 personas que recibieron la transferencia, y uno de control con 200 participantes que no accedieron al ingreso, pero participaron en actividades de investigación compensadas. La selección se realizó de forma aleatoria entre residentes de vecindarios con ingresos iguales o inferiores a la mediana de la ciudad (\$46,033 USD anuales).

Para facilitar la inclusión de personas sin acceso a servicios bancarios formales, un 9.7% de los habitantes según datos previos, el dinero fue entregado mediante tarjetas de débito prepagadas, eliminando barreras tecnológicas y garantizando costos nulos para los participantes. Además, el equipo organizador procuró la preservación de beneficios sociales existentes mediante asesorías personalizadas y negociaciones con agencias locales para evitar la pérdida de prestaciones como CalWorks (Castro Baker, West, & Yampolskaya, 2021).

El experimento fue acompañado por un equipo de investigación independiente liderado por las profesoras Stacia West (Universidad de Tennessee) y Amy Castro Baker (Universidad de Pensilvania), y financiado por el programa *Evidence for Action* de la Fundación Robert Wood Johnson. Los datos fueron recogidos entre diciembre de 2018 y agosto de 2021, con especial atención a la etapa previa a la pandemia de COVID-19, durante la cual se evaluaron los efectos del ingreso en condiciones socioeconómicas relativamente normales. Posteriormente, se continuó el seguimiento para observar el impacto durante la emergencia sanitaria y tras la finalización del programa.

Los datos recogidos durante el primer año del experimento SEED permiten observar de forma clara cómo un ingreso garantizado mensual puede generar impactos positivos en múltiples dimensiones del bienestar, aun cuando el monto no sea suficiente para cubrir todos los gastos de un hogar.

Uno de los hallazgos más notables fue el aumento de la estabilidad financiera entre los participantes del grupo de tratamiento. Mientras que, al inicio del experimento, el

52% de los beneficiarios eran capaces de cubrir un gasto inesperado de 400 dólares (sin recurrir a préstamos o tarjetas de crédito), esta proporción aumentó al 70% tras el primer año. En contraste, el grupo de control solo mostró un aumento marginal, pasando de 48% a 53% en el mismo periodo (Castro Baker, West, & Yampolskaya, 2021). Esto sugiere que el ingreso garantizado permitió a los hogares construir una red de seguridad básica que, sin necesidad de grandes sumas, redujo su vulnerabilidad ante emergencias.

En términos de empleo, el experimento también refutó una de las críticas más comunes a este tipo de políticas: la idea de que desincentivan el trabajo. De hecho, el estudio encontró que la participación laboral fue mayor en el grupo que recibió la transferencia. En febrero de 2020 (antes de la pandemia), el 28% de los beneficiarios del ingreso básico estaban empleados a tiempo completo, frente al 17% del grupo de control. Esta diferencia se atribuye a que el ingreso permitió a muchas personas tener tiempo y recursos para buscar mejores trabajos, pagar transporte, adquirir ropa adecuada para entrevistas y cubrir cuidados infantiles.

Respecto a la salud mental, los efectos también fueron contundentes. El grupo de tratamiento reportó niveles significativamente más bajos de ansiedad y depresión. Además, los participantes mostraron mejoras en la percepción de control sobre su vida, un indicador clave asociado con el sentido de agencia personal y capacidad de planificación futura. Esta mejora en la salud emocional estuvo acompañada de testimonios que destacan el alivio de no tener que “contar centavos cada día” o “elegir entre pagar la renta o comprar medicina”.

Los datos sobre el uso del dinero también fueron reveladores. Contrario al mito de que el ingreso libremente disponible se gasta en productos innecesarios, los registros de las tarjetas prepagadas mostraron que la mayor parte del gasto se destinó a alimentos, servicios públicos, gasolina y pagos de deudas. En porcentajes, el 37% del dinero se utilizó en alimentos, el 22% en transporte, el 11% en facturas domésticas y solo 1% en recreación (Castro Baker et al., 2021). Esto respalda la idea de que los beneficiarios utilizan los recursos de manera responsable, especialmente cuando el ingreso proviene de un entorno de confianza y sin estigmas.

Más allá de los datos numéricos, uno de los aportes más importantes del experimento SEED fue la incorporación de relatos personales que permiten comprender cómo se experimenta el cambio cuando el estrés financiero disminuye, incluso de forma parcial. A través de entrevistas, grupos focales y diarios narrativos, el equipo investigador pudo documentar transformaciones emocionales y relaciones en las vidas de los

participantes, en dimensiones que a menudo no se capturan en estadísticas tradicionales.

Un tema recurrente fue el sentimiento de alivio mental. Muchos participantes señalaron que, por primera vez en años, podían “respirar tranquilos” o “dormir toda la noche sin pensar en el dinero”. La transferencia mensual no solo ayudaba a pagar cuentas, sino que eliminaba la carga emocional de la incertidumbre constante, lo que mejoraba su humor, su energía y su capacidad para tomar decisiones. Algunos expresaron que el ingreso los ayudó a retomar el control de su vida, tras años de sentirse atrapados por el trabajo precario, las deudas y las obligaciones sin margen de elección.

Otro eje relevante fue la reorganización del tiempo y de las prioridades familiares. Por ejemplo, una madre explicó que pudo reducir las horas extra en un empleo inestable para pasar más tiempo con su hijo y ayudarlo con la escuela. En otros casos, el ingreso permitió que personas dejaran relaciones abusivas o altamente dependientes, ya que el dinero representaba una forma de libertad personal. La estabilidad ofrecida por la transferencia no solo alivió lo económico, sino que modificó la forma en que las personas se valoraban a sí mismas y se proyectaban en el futuro.

Varios participantes contaron que, gracias a la estabilidad mínima ofrecida por el ingreso, pudieron inscribirse en cursos de capacitación, terminar trámites de ciudadanía, asistir con regularidad al médico o simplemente disfrutar de una comida sin culpa. En estos casos, el ingreso garantizado funcionó como una especie de “puerta de entrada” a otras formas de desarrollo personal que antes parecían imposibles por la presión constante de subsistir. Además, el equipo de investigación resaltó que los efectos positivos no solo se dieron en quienes recibieron el dinero, sino también en sus entornos familiares y comunitarios. Al mejorar el ánimo y la organización en el hogar, varios niños beneficiados indirectamente comenzaron a dormir mejor, alimentarse con mayor regularidad o mejorar su desempeño escolar. Estos beneficios intergeneracionales son difíciles de medir a corto plazo, pero muestran el potencial transformador del ingreso garantizado como herramienta de bienestar relacional.

En conjunto, SEED no solo fue un experimento exitoso en términos de resultados, sino una intervención política que ayudó a redefinir lo que significa vivir con dignidad en contextos de precariedad estructural.

A manera de síntesis, en la tabla 2 se presentan los más relevantes de los cinco casos analizados.

Tabla 2. Resultados comparados de los casos empíricos

Casos	Participación laboral y empleo	Salud física y mental	Estabilización financiera
Alaska	La participación laboral se mantuvo estable incluso a largo plazo	-----	El dividendo mejora el consumo sin comprometer el trabajo.
Mincome (Canadá)	Las reducciones fueron marginales y se concentraron en madres y jóvenes que optaron por cuidar a sus hijos o seguir estudiando	Registró una reducción del 8.5% en hospitalizaciones, especialmente por salud mental.	-----
Finlandia	Los beneficiarios trabajaron seis días más en promedio que el grupo de control, aunque el efecto fue modesto	Mostró mejoras en confianza, menor estrés y mayor bienestar psicológico.	-----
Cambridge	Los beneficiarios mantuvieron sus empleos e incluso mejoraron su capacidad de buscar mejores oportunidades laborales.	Reducciones importantes en ansiedad, depresión y angustia financiera.	Se redujo el uso de créditos de emergencia y aumentó el ahorro informal.
Stockton	El porcentaje de personas con empleo a tiempo completo aumentó más en el grupo tratado que en el grupo de control	Reducción en ansiedad y depresión.	Más del 70% del gasto fue en alimentos, servicios y transporte.

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis presentado

Conclusiones

El análisis comparado de cinco programas de ingreso garantizado, Mincome (Canadá), Alaska Permanent Fund Dividend (EE.UU.), el experimento en Finlandia, y los pilotos municipales en Cambridge y Stockton (EE.UU.), permite afirmar que estas experiencias, aunque diversas

en diseño, escala y contexto, ofrecen una base empírica robusta para valorar la viabilidad y los efectos de una política de IBU.

En primer lugar, los hallazgos de estos casos refuerzan consistentemente la idea de que el IBU no desincentiva la participación en el mercado laboral. Por el contrario,

varios estudios mostraron que los beneficiarios mantuvieron o incluso mejoraron sus condiciones de empleo, ya sea accediendo a trabajos de mayor calidad, invirtiendo en educación o utilizando el ingreso como puente para transiciones laborales más sostenibles. Esta evidencia desmiente uno de los argumentos clásicos en contra del ingreso garantizado, al demostrar que las personas no necesariamente abandonan el trabajo cuando se les garantiza un piso mínimo de ingresos, sino que ganan margen de maniobra para tomar decisiones más racionales y saludables.

En segundo lugar, los programas analizados generaron efectos positivos sostenidos en salud mental, seguridad económica y percepción de bienestar. Así como, reducción en hospitalizaciones, disminución de ansiedad y estrés, y mejoras en la capacidad de planear el futuro, aspectos que fueron reportados en todos los casos. Estos resultados posicionan al IBU no solo como una política redistributiva, sino también como un instrumento de salud pública y cohesión social.

En tercer lugar, las experiencias de Cambridge y Stockton demostraron que los gobiernos locales pueden jugar un rol clave en la implementación de programas de ingreso garantizado. Esto amplía las posibilidades de experimentar con diseños adaptados al contexto urbano, poblacional y fiscal de cada territorio, sin esperar a grandes reformas federales o nacionales.

Asimismo, los casos revisados aportan evidencia sobre la importancia del diseño institucional. Programas con reglas claras, pagos automáticos, sin vigilancia punitiva ni condicionalidades arbitrarias, fueron mejor recibidos por la población y generaron menor estigmatización.

Finalmente, estos estudios muestran que el ingreso garantizado no solo ayuda con dinero, sino que también ofrece otros beneficios importantes. Además de mejorar los ingresos, permite a las personas tener más tiempo para ellas mismas, vivir con menos estrés y tomar mejores decisiones sobre su vida. En un momento donde los trabajos son cada vez más inestables y los apoyos tradicionales a veces no alcanzan; el ingreso garantizado se presenta como una forma útil y complementaria para proteger a las personas, respetando su libertad y buscando una sociedad más justa.

No obstante, el paso hacia un IBU completo requiere elementos adicionales que los casos estudiados han permitido identificar. Por ejemplo, la experiencia de Alaska muestra la importancia de una fuente de financiamiento sostenible y recurrente (en este caso, la renta petrolera), mientras que Mincome y Finlandia demuestran el valor de experimentos a gran escala con rigor metodológico para evaluar efectos multidimensionales. Los programas municipales como Cambridge y Stockton evidencian que aun con recursos limitados, los pilotos pueden servir como

laboratorios sociales y políticos para generar apoyo ciudadano y legitimidad pública.

Así, la transición hacia un IBU necesitaría avanzar en tres dimensiones: (1) garantizar suficiencia del monto para cubrir necesidades básicas, (2) asegurar mecanismos de financiamiento estables y progresivos y, (3) generar consensos políticos y sociales que lo hagan viable.

Referencias

- Basic Income Earth Network (2019). About Basic Income. *Basic Income Earth Network*. Disponible en: <https://basicincome.org/> [20 de enero de 2025].
- Berman, Matthew (2023). *A rising tide that lifts all boats: Long-term effects of the Alaska Permanent Fund Dividend on poverty*. Anchorage: University of Alaska Anchorage.
- Bibler, Adam, Mouhcine Guettabi y Matthew Reimer (2019). *Short-term Labor Responses to Unconditional Cash Transfers*. Institute of Social and Economic Research, University of Alaska Anchorage.
- Calnitsky, David (2016). More Normal than Welfare: The Mincome Experiment, Stigma, and Community Experience. *Canadian Review of Sociology*, Vol. 53, Núm.. 1, pp. 26–71.
- Castro Baker, Amy, West, Stacia & Yampolskaya. Marina (2021). *Preliminary Analysis: SEED's First Year*. Philadelphia: Center for Guaranteed Income Research.
- DeYoung, Sara, Tandon, Stacia West, Amy Castro, Roberta Golinkoff, & Cynthia Thompson (2024). *The American Guaranteed Income Studies. Cambridge*. Massachusetts: University of Pennsylvania, Center for Guaranteed Income Research.
- Feinberg, Robert M. & Kuehn, Daniel (2018). Guaranteed Nonlabor Income and Labor Supply: The Effect of the Alaska Permanent Fund Dividend. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, Vol. 18, Núm. 3, pp. 1–13.
- Forget, Evelyn L. (2011). The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment. *Canadian Public Policy*, Vol. 37, Núm. 3, pp. 283–305.
- Goldsmit, Scott (2002). The Alaska Permanent Fund Dividend: An Experiment in Wealth Distribution. Ponencia presentada en el 9º Congreso Internacional de BIEN, Ginebra.
- Guettabi, Mouhcine (2019). What do we know about the effects of the Alaska Permanent Fund Dividend? *Institute of Social and Economic Research*, University of Alaska Anchorage.
- Haarmann, Claudia, Haarmann, Dirk, Jauch, Herbert, Shindondola-Mote, Hilma & Nattrass, Nicoli (2009). *Towards a Basic Income Grant for All: Basic Income Pilot Project Assessment Report*. Windhoek: Basic Income Grant Coalition.
- Haushofer, Johannes & Shapiro, Jeremy (2016). The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 131, Núm. 4, pp. 1973–2042. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw025>
- Hämäläinen, Ulla, Perkiö, Johanna & Ylikännö, Marko (2019). *An experiment to inform universal basic income: New evidence from Finland*. Kela Working Papers..
- Howard, Michael W. & Widerquist, Karl (2012). Exporting the Alaska Model. *Exploring the Basic Income Guarantee*, pp. 1–18. Palgrave Macmillan. Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/993911574784> [20 de enero de 2025].
- Hsieh, Chang-Tai (2003). Do Consumers React to Anticipated Income Changes? Evidence from the Alaska Permanent Fund. *American Economic Review*, Vol. 93, Núm. 1, pp. 397–405.

- Jones, Damon & Marinescu, Ioana (2018). *The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund*. NBER Working Paper. No. 24312.
- Kangas, Olli, Jauhainen, Heikki, Simanainen, Miska & Ylikännö, Marko (2021). *Evaluación del experimento de renta básica de Finlandia*. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud.
- Koistinen, Pertti (2014). Good and Bad Times of Social Innovations: The Case of Universal Basic Income in Finland. *Basic Income Studies* <https://doi.org/10.1515/BIS-2014-0009>.
- Kozminski, Kamil & Baek, Jungho (2017). Can an oil-rich economy reduce its income inequality? *Energy Economics*, Vol. 65, pp. 41–49.
- Kueng, Lorenz (2018). Excess Sensitivity of High-Income Consumers. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 133, Núm. 4, pp. 1693–1751.
- Lindert, Kathy, Linder, Anja, Hobbs, Jason & De la Brière, Bénédicte (2007). *The Nuts and Bolts of Brazil's Bolsa Familia Program*:
- Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context. World Bank Social Protection Discussion Paper No. 0709.
- Marinescu, Ioana (2017). *No Strings Attached: The Behavioral Effects of U.S. Unconditional Cash Transfer Programs*. Roosevelt Institute Working Paper.
- Paine, Thomas (1797). *Agrarian Justice*. London.
- Permanent Fund Dividend (2024). Annual Reports. *Alaska.gov* Disponible en: <https://pfd.alaska.gov/Division-Info/Annual-Reports> [20 de enero de 2025].
- STM–Ministerio de Asuntos Sociales y Salud (2020). *Informe final del experimento de renta básica en Finlandia 2017–2018*. Gobierno de Finlandia.